

UNA CONMEMORACIÓN SIGNIFICATIVA EN EL PANORAMA ACTUAL: CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (revisado) LA VALLETTA, MALTA (1992)

La Convención Europea de Arqueología. 2002, el décimo aniversario de una convención

Desde la década de los 60 -cuando el Profesor Pallotino, padre de la etruscología en Italia, fue elegido presidente del primer grupo de trabajo encargado de definir las principales amenazas de la arqueología en Europa- hasta hoy, el ejercicio normativo del COE ha ido evolucionando de forma paralela a los requerimientos de las prácticas arqueológicas -constantemente repensadas-, tanto desde el punto de vista teórico, como en su formulación técnico-metodológica.

En esta primera etapa, la protección de las excavaciones arqueológicas, el tratamiento “objetual” de los restos -rescatados de forma que permitiera el uso futuro de los registros para la investigación- y la preocupación por una mejor preservación del potencial científico de los sitios y sus registros definieron las primeras fórmulas normativas de concertación, acompañadas de una solicitud expresa: la necesidad de regular la circulación de los objetos arqueológicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no contaba con una legislación satisfactoria para la protección del patrimonio arqueológico.

La primera Convención Europea de Arqueología se abre a la firma de los Estados miembros en Londres, en el año 1969. Era una convención preocupada especialmente por las excavaciones de carácter ilícito, clandestinas, que estaban destruyendo yacimientos y anulando con ello cualquier tipo de investigación posterior. Una mentalidad museística para la arqueología prevalecía en el trasfondo del documento, y una voluntad de abordar los problemas derivados de coleccionismos que favorecían el tráfico ilícito de estos bienes. La salvaguarda del valor científico lleva aparejados mecanismos de control, supervisión y la capacitación de personas autorizadas por ley para la realización de estos trabajos.

Esta normativa declaró la necesidad de desarrollar métodos científicos para la excavación y protección de los lugares, durante y después de la intervención arqueológica.

La Convención Europea de Patrimonio Arqueológico de la Valletta se enfrenta a otros miedos y otros riesgos. Las excavaciones clandestinas han sido sustituidas por el peligro acechante de las grandes construcciones públicas; fábricas, oleoductos, vías férreas y demolición de manzanas en zonas urbanas ponen a prueba las leyes vigentes en la defensa del patrimonio del subsuelo. La evolución en la aplicación de las técnicas no destructivas de análisis, la consolidación de disciplinas de arqueología del paisaje, los problemas filiales de planeamiento y la necesidad de acercarse al público son prerrogativas esenciales en esta nueva normativa.

Esta Convención hereda la filosofía de la conservación integrada, iniciada por la Carta de Amsterdam de 1975, definitivamente orientada por la Convención de Granada de 1985. En el concepto de conservación integrada convergen las exigencias de la cooperación y la concertación entre profesionales. Gestores, empresas, planificadores, autoridades, arqueólogos e investigadores van a intentar casar protección y planificación. Contextos -en vez de excavación- y evidencias -en vez de objetos- definen un panorama mucho mayor de implicaciones, invitando a disciplinas “fronterizas” a sentarse necesariamente a la misma mesa de discusión. En esta segunda Convención, lo importante es la circulación de la información, no sólo de los objetos arqueológicos.

Desde la década de los 80, las grandes obras públicas pusieron de manifiesto la vulnerabilidad del patrimonio arqueológico. Los trabajos preparatorios de la Convención comenzaron en Florencia en 1984 y prosiguieron en Niza en 1987. El Coloquio de Florencia debatió el papel de la arqueología en temas de planificación y gestión urbana a la luz de los dictados de la conservación integrada. Niza continuó los debates en la misma línea. La Recomendación (89) 5 -concerniente a la protección y la valorización del patrimonio arqueológico en contextos urbanos y en planificación territorial- aseguró un óptimo punto de partida al texto de la Convención. Mr. Trotzy, representante del gobierno sueco, fue elegido presidente del grupo de trabajo que elaboró la Convención de Malta.

A los riesgos, ya definidos por la primera Convención y subrayados por ésta segunda -como las excavaciones clandestinas o no científicas- se unen otros tantos, resumidos en:

- un creciente número de importantes trabajos de grandes obras públicas;
- riesgos naturales;
- la insuficiente labor de sensibilización pública sobre el patrimonio arqueológico.

El texto se hace eco de la evolución de la práctica arqueológica (uso de una más amplia gama de análisis de laboratorio, geofísico y geográfico [GIS]), de la evolución de la práctica institucional en conservación del patrimonio arqueológico, así como en el cambio de concepción del concepto de patrimonio.

La arqueología se define como una fuente de memoria colectiva, como instrumento de estudio histórico o científico, como remanente de trazas -no de objetos- de actividad humana en el paisaje, en su medio ambiente histórico o natural. Se tipifican como trazas: estructuras, construcciones, grupos de edificios, sitios, objetos muebles, monumentos y sus contextos superficiales enterrados -susceptibles de ser analizados por metodología arqueológica- o sumergidos en aguas territoriales o continentales; es decir, cualquier evidencia de cualquier naturaleza que pueda dar luz sobre el estudio del pasado, capaz de ilustrar nuestra historia.

La notificación de los encuentros fortuitos debe quedar reglamentada, independientemente de cual sea la formulación nacional.

La Convención subraya expresamente la necesidad de una mayor toma de conciencia -por parte del gran público- de la importancia de las labores arqueológicas y de una mayor sensibilización hacia el conocimiento de sus objetivos, planificación, riesgos, resultados y exigencias de la conservación.

Veintidós países miembros han ratificado la Convención de la Valletta, además de dos países no miembros como son la Santa Sede y la federación de Bosnia-Herzegovina. España no ha ratificado aún esta Convención.

La Convención hace mención explícita a la necesidad de preservar yacimientos no excavados para futuras generaciones y garantizar la naturaleza científica de los trabajos de investigación arqueológica: autorizaciones, supervisión, prevención de tráfico ilícito, excavar de forma cualificada-científica, asegurar la conservación y el manteni-

miento del área -durante y después de los trabajos de investigación-, implementar los medios de una protección física, ya sea en zonas consideradas reservas para futuras investigaciones *-in situ* si es posible- o bien asegurar un almacenamiento apropiado para todo tipo de repertorio arqueológico.

Sin embargo, todas estas prescripciones continúan la misma filosofía de la convención anterior. Es necesario llegar al artículo 5 para analizar lo verdaderamente novedoso de este texto normativo. La arqueología debe estar llamada necesariamente a la discusión de las políticas de planificación. Esta llamada a compartir la definición de las reglas del juego que deben combinar el desarrollo urbano o territorial y la preservación de un subsuelo -prehistórico o histórico, susceptible de ser estudiado con metodología arqueológica- es esencial para la aplicación de la Convención. Cualquiera que sea el plan de desarrollo urbano o territorial debe dotar de las suficientes finanzas, tiempo y recursos humanos -autorizados y capacitados- para la realización de estudios científicos apropiados de diagnóstico y análisis. Todo ello acompañado de recursos crecientes -para una arqueología preventiva y sus correspondientes estudios de impacto ambiental y arqueológico-, de prospecciones adecuadas, de toma de muestras, de estudios geofísicos y de la correspondiente publicación de los resultados.

En el panorama actual, se están viviendo las consecuencias de los primeros ecos del desarrollo de la arqueología preventiva cuando esta actividad se realiza a través de empresas de carácter privado y la labor arqueológica pasa de la mera investigación a ser un servicio, de acuerdo a cánones financieros y comerciales. Cada uno de los marcos administrativos nacionales europeos en los que se desarrolla esta práctica implica consecuencias distintas que afectan directamente a la conceptualización de esta labor arqueológica. En Holanda, por ejemplo, una agencia privada que desarrolla trabajos de arqueología preventiva puede quedar en una situación muy comprometida, ya que la legislación vigente la sitúa entre los emprendedores y la autoridad competente en el patrimonio arqueológico. En el sistema inglés no existe un control adecuado de los trabajos arqueológicos, y puede haber un riesgo inherente a que prevalezcan consideraciones financieras en los trabajos en curso. A su vez, en el modelo francés no hay competición posible: las empresas pertenecen al estado y su trabajo, por desgracia, se subsume en una muy farragosa burocracia de tramitación. Nueve países *post-socialistas* han ratificado la Convención y, en estos casos de arqueología de gestión o comercial, no presentan problemas. Los trabajos

arqueológicos siguen siendo responsabilidad de museos, universidades y academias científicas y/o artísticas.

En los últimos diez años, desde la apertura a la firma de la Convención, el COE ha desarrollado un complejo Plan de Arqueología para Europa. Entre las principales iniciativas figuran:

- una campaña especial sobre la Edad del Bronce como primera edad de oro en Europa;
- la publicación de un glosario de terminología arqueológica en Europa, en dos lenguas: inglés y francés;
- una propuesta de formulación de inventario arqueológico estandarizado para sitios y monumentos arqueológicos;
- un estudio europeo sobre arqueología urbana;
- programas específicos como el PISA o AGESA sobre la gestión integral de sitios arqueológicos;
- la Carta de Segesta y la Declaración de Verona sobre el uso de lugares arqueológicos clásicos para espectáculos;
- un código de buenas prácticas sobre la arqueología urbana, que teje la trama de las implicaciones interdisciplinares en la práctica de la arqueología urbana actual en Europa.

El código anima a la cooperación profesional como garantía para obtener resultados cualificados, a través del desarrollo de políticas de planificación urbana que sin ninguna duda organizan intervenciones en lo que puede ser considerado como el gran patrimonio común de los europeos: el patrimonio urbano. Como código no es un documento vinculante, pero es una excelente guía práctica para profesionales y su trabajo diario.

En los años que vienen, el COE se propone trabajar de forma más decidida en el seguimiento del cumplimiento de esta labor en los Estados miembros. Se trata, por tanto, de valorar diez años después la pertinencia de sus principios, los beneficios de una arqueología preventiva y los nuevos retos del patrimonio arqueológico en una sociedad multiétnica, multicultural, multiconfesional y plurilingüe, en un continente que por desgracia ha acumulado muchas experiencias de manipulación del estrato histórico para inventar mitos de origen, tan falsos como apropiados a los propósitos del poder.

En los años próximos, la protección de patrimonio arqueológico va a estar sin duda ligada a las prioridades políticas del COE, según han quedado establecidas por la Conferencia Ministerial de Portoroz:

- Los problemas derivados del binomio "patrimonio cultural - sociedad de la información" (digitalización, conservación de memorias digitales, inventarios...);
- Interpretación y presentación de patrimonio cultural: problemas de identidad cultural, lugares plurales, sitios de convergencia confesional o étnica, ética en la construcción del mensaje patrimonial;
- La división de patrimonio cultural va a preparar un nuevo instrumento de referencia -carta, declaración, o protocolo- cuyo objetivo es promover como principio universal la protección y valoración de patrimonios representativos de diversas formas de expresión cultural que han aparecido en el curso de la historia en un territorio determinado, independientemente del contexto político actual de ese territorio.

La Convención de la Valletta es una convención técnica, hecha por técnicos, que no se aproxima ni de lejos a los problemas de interpretación arqueológica de acuerdo a lecturas políticas manipuladas del pasado. Desde el año 2000, nuestro departamento ha comenzado una serie de trabajos de prospectiva encaminados a analizar el ensanchamiento y la ambigüedad a la hora de definir "patrimonio cultural europeo", toda vez que hemos visto cómo el patrimonio juega un papel esencial en la provocación de conflictos entre comunidades, y con ello, empezar a entender cómo el patrimonio cultural -material e inmaterial- puede ser factor de prevención de conflictos. Y la arqueología es campo abonado y privilegiado en este intento.

Estrasburgo 2 de abril, 2002

Nuria Sanz

*Coordinadora de los proyectos nacionales y transnacionales de la campaña "Europa, un patrimonio común".
Consejo de Europa*